

EUROPA, LA *BANLIEUE* Y EL NEOLIBERALISMO

Cuando 2005 se acercaba a su fin, los suburbios de las ciudades francesas se vieron alumbrados por las hogueras de una violenta revuelta social. Los disturbios e incendios en las *banlieues* iniciados en París durante los últimos días de octubre impulsaron al presidente Chirac a aparecer en televisión el 14 de noviembre para dirigirse a los jóvenes de los «barrios difíciles» como «hijas e hijos de la República» y denunciar el «veneno de la discriminación», aunque el toque de queda y las medidas de emergencia adoptadas empleaban un lenguaje diferente. Después de todo, la derecha en el poder sólo cuenta con un repertorio limitado de medidas. En un primer momento pareció como si el ministro de Interior y esperanzado candidato neoliberal a la presidencia Nicolas Sarkozy fuera a pagar un precio político por su política de «tolerancia cero» con puño de hierro y sus insultos hacia la «chusma», y que el beneficiario sería su rival en la contienda por la presidencia francesa, el primer ministro gaullista Dominique de Villepin. Lo que se ha producido, por el contrario, es una reacción virulenta de la derecha, que ha puesto a Sarkozy a la par con el Frente Nacional neofascista de Jean Marie Le Pen (al que carteles apresuradamente difundidos por el FN atribuían la predicción hace mucho tiempo de ese fenómeno) para sacar provecho del Gran Miedo que se ha apoderado de amplios sectores de la población francesa, incluidos, presumiblemente, los millones de franceses enardecidos con la posibilidad de adquirir participaciones en Électricité de France (EDF), la empresa nacional francesa de electricidad, cuya privatización coincidió con los disturbios.

No es necesario detallar aquí la suerte de los jóvenes de origen inmigrante de segunda o tercera generación en Francia: se ha mostrado en varias películas de gran impacto –*La haine*, de Mathieu Kassovitz, llegó a las pantallas en 1995– y se ha analizado en innumerables informes. Se han gastado grandes sumas en programas destinados a mejorar la situación de los peor tratados; de hecho, las campañas populares contra el racismo, el apoyo de la Iglesia y de los medios de comunicación a los *sans papiers* ilegales y la composición multirracial de los equipos nacionales de deportes se han considerado a menudo como demostración de la capacidad de la sociedad francesa para evitar la aparente desintegración. Muchos entendieron incluso la decisión gubernamental de prohibir el uso del chador a

las jóvenes estudiantes musulmanas como una señal de la confianza del Estado en el mantenimiento del control.

Pero las privatizaciones y recortes han servido, en Francia como en otros países, para succionar los servicios, la renta y el poder desde los pobres hacia los ricos, y para acrecentar las filas de una clase baja sin nada que perder. Con el trasfondo de la agresión occidental contra el mundo islámico, los jóvenes de los suburbios con apellidos árabes o africanos y una educación deficiente saben cuán improbable resulta que lleguen a tener *nunca* un empleo en el nuevo mundo de las «reformas». La mal concebida decisión sobre el pañuelo sólo añadió la mofa a la befa: ¿de qué les sirve la igualdad política «republicana» a los que más sufren debido a la creciente desigualdad económica? El empobrecimiento ha llegado a un punto en el que cientos de indigentes acampan a lo largo de la carretera que lleva al aeropuerto Charles de Gaulle, respirando las humaradas del tráfico mientras se apiñan bajo plásticos o cartones en la estrecha franja entre la carretera y la valla que les sirve de alojamiento. Entretanto, la privatización de la EDF, nacionalizada tras la liberación de la ocupación nazi y uno de los escasos bastiones que le quedaban al sindicato comunista CGT, está batiendo todos los récords. Casi cinco millones de franceses acomodados se apresuraron a obtener acciones al precio de 32 euros, pagando un total de 7.000 billones de euros¹. Bastó la muerte de dos chicos en la subestación eléctrica donde se habían ocultado (perseguidos por la policía, que sospechaba que habían cometido un pequeño hurto) para cortocircuitar los mundos cada vez más desconectados de los ricos y los pobres y prender la violencia que se extendió por todas las barriadas periféricas de Francia.

De Francia a Europa

La tolerancia cero adoptada por Sarkozy, combinada con el nulo interés por la suerte de los pobres, ha resultado una mezcla explosiva. Sin embargo, lo que diferencia la situación francesa de la de los países vecinos no es sólo la violencia del reciente estallido. Durante más de una década se ha mantenido una creciente marea de protestas populares, cada vez más amplias, contra el neoliberalismo: desde las huelgas de masas durante el conflictivo invierno de 1995-1996 que derribaron al gobierno de Juppé y la constitución de ATTAC como red de grupos ciudadanos en 1998, hasta las recientes luchas contra la privatización de la Société Nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) –la empresa de *ferrys* que unen Córcega con la costa francesa–, o la huelga para preservar la sociedad nacional de ferrocarriles como empresa estatal. Pero si bien los problemas que afronta la sociedad francesa son, en muchos aspectos, singula-

¹ El 18 de noviembre se anunció oficialmente que 4,85 millones de ciudadanos franceses habían comprado acciones de la EDF, superando ampliamente los 3,1 millones de beneficiarios de la privatización de Gaz de France en el mes de julio y los 3,8 millones de accionistas de France Télécom en 1997: *Le Monde*, 19 de noviembre de 2005.

res, y no sólo en cuanto al instinto político y la militancia de tantas de las respuestas que han suscitado, en muchos otros son también, en gran medida, específicamente *européos*, y son éstos los que me propongo analizar en este artículo.

Porque lo que está en cuestión en los recientes desórdenes franceses es, fundamentalmente, la dificultad para aplicar medidas disciplinarias neoliberales «de mercado» a las sociedades continentales europeas que se han desarrollado históricamente bajo los auspicios del Estado, y en muchos aspectos *contra* el liberalismo (aunque basándose en las relaciones de propiedad y formas de explotación capitalistas), mientras que, al mismo tiempo, la capacidad colectiva para expresar el descontento se ha visto trabada por las restricciones impuestas a la democracia parlamentaria mediante la reestructuración neoliberal que comenzó a finales de la década de 1970. La prisa de la Unión Europea por poner en vigor «reformas de mercado» tras el colapso del bloque soviético sólo sirvió para implementar las profundas contradicciones entre la liberalización y la tradición intervencionista del Estado en varios países europeos, y sobre todo en Francia. El Tratado de Maastricht de 1991 es el jalón fundamental a este respecto. En Francia se ratificó por muy estrecho margen la Unión Económica y Monetaria negociada en Maastricht, y vale la pena recordar que en aquel momento el autor y político «verde» Alain Lipietz advirtió que, en ausencia de un auténtico mandato popular, las implicaciones socialmente destructivas de aquel tratado podían dar lugar al cabo de unas pocas décadas a una guerra civil².

La integración regional es un rasgo estructural de la transnacionalización del capital, que requiere la puesta en común y la coordinación de las funciones estatales; pero en las condiciones de Europa occidental tras la Segunda Guerra Mundial se configuró como una constelación en la que el Estado más fuerte del continente permanecía postrado ante el Occidente anglófono y el nuevo contrincante frente a su hegemonía, la Unión Soviética y el bloque del Este; de ahí que la integración europea mantenga en su configuración institucional elementos de un compromiso de clases y geopolítico ausentes en otros lugares; acomodados de los que Francia, incómodamente situada entre formaciones políticas más amplias, fue en muchos casos el primer valedor. Con la restauración total de la soberanía alemana y su reunificación, y el colapso de la URSS, cabía esperar que el proceso específico de integración que produjo las estructuras cuasi estatales de Europa hubiera completado su recorrido, aunque la lógica general de los Estados, unidos para modelar y facilitar la transnacionalización capitalista, permaneciera en pie. Sin embargo, la «construcción institucional» europea, pauta que diferencia a la Unión Europea del ALCAN, la ASEAN o MERCOSUR, debería, a partir de esas premisas, perder impulso o incluso descomponerse.

² Citado en *Le Monde diplomatique*, agosto de 1992, p. 30.

El núcleo anglófono del liberalismo

La conjugación de geopolítica histórica y economía política global que subyace a la integración europea requiere un tipo de análisis adecuado a su objeto; sin embargo, las disciplinas académicas correspondientes no están bien equipadas para esa tarea. La teoría de las relaciones internacionales, en particular, se ha visto lastrada durante mucho tiempo por lo que cabe entender como una interpretación doblemente equivocada de la historia. En primer lugar está el «mito de 1648», la idea de un momento fundacional en la política mundial moderna –los Tratados de Westfalia con los que concluyeron las guerras de religión–, que dio lugar a un sistema de Estados territoriales soberanos. Pero, como ha argumentado Benno Teschke, «no hubo ninguna “ruptura estructural” que alejara la forma moderna de las relaciones internacionales de la premoderna, sino que las relaciones internacionales desde 1688 hasta la Primera Guerra Mundial y aun después se referían principalmente a la negociación, disputada y mediada geopolíticamente, de las presiones modernizadoras procedentes de la Gran Bretaña capitalista»³. En segundo lugar, no obstante, y esto es aún más fundamental, se han interpretado equivocadamente los aspectos *espaciales* del surgimiento de la modernidad, ya que en esa afirmación –en lo demás precisa– «Gran Bretaña» se refiere de hecho a una esfera transnacional anglófona forjada por los vínculos ultramarinos y la supremacía marítima, lo que se podría llamar un «núcleo lockeano» tomando como epónimo el nombre del autor de los *Two Treatises of Government*.

Aun si nos olvidamos de las relaciones «exteriores» premodernas (entre diferentes tribus, o entre civilizaciones imperiales, que reclaman una soberanía universal, con los nómadas en sus fronteras), el eje central de la geopolítica en el inicio de la era moderna se situaba entre entidades nacionales, no necesariamente idénticas, dotadas de Estados que ejercían la soberanía sobre territorios pretendidamente bien definidos y no solapados. Inglaterra, inmersa en su propia guerra civil en aquel momento, no firmó los Tratados de Westfalia; miraba más bien hacia el Oeste, al otro lado del Atlántico. Sólo a la luz de esta constelación transatlántica podemos entender «1648» como un acontecimiento definitorio. De hecho, el Occidente anglófono inicialmente formado por las Islas británicas y Nueva Inglaterra obligó a las clases dominantes del continente europeo –y más allá– más capaces de negociar las «presiones modernizadoras» procedentes de la zona anglófona a basarse en la soberanía estatal como pivote de sus esfuerzos para hacerles frente y ponerse a su altura.

El núcleo lockeano no se desarrolló como un bloque capitalista. Antes fue una amplia sociedad autorregulada, de lengua inglesa e imbuida de deter-

³ Benno TESCHKE, *The Myth of 1648. Class, Geopolitics and the Making of Modern International Relations*, Londres, 2003, p. 250.

minadas actitudes hacia la autoridad y el derecho que los colonos norteamericanos trasladaron consigo desde las Islas Británicas junto con el puritanismo. La Revolución Gloriosa que consagró la subordinación del Estado a la sociedad «civil» (de ahí el epíteto de «lockeana») tuvo un poderoso eco en Norteamérica. Cuando las noticias llegaron a Boston y otros asentamientos a principios de 1689, se produjeron en rápida sucesión un relevo incruento tras otro. Massachusetts, en particular, saludó a Guillermo de Orange como mesías calvinista y las colonias norteamericanas se acercaron más que nunca a la madre patria⁴. Aunque pueda parecer paradójico a primera vista, la secesión americana en 1776 no hizo más que confirmar ese vínculo subyacente, por más que estableciera una jurisdicción estatal distinta al otro lado del Atlántico. Pese a las subsiguientes rivalidades entre Gran Bretaña y Estados Unidos sobre el liderazgo del Occidente anglófono, su actitud hacia el mundo exterior se caracterizó siempre por esa experiencia formativa, en la que muchos lazos vinculaban la idea persistente de un «pueblo elegido» puritano al compromiso con la libertad frente a la autoridad estatal y la generosidad para «liberar» a otros.

Estados aspirantes rivales

Sólo en relación con este trasfondo puede entenderse adecuadamente el desarrollo social y político a escala mundial como un proceso en el que el núcleo liberal en evolución se enfrentó a una sucesión de Estados rivales, empezando por la Francia del siglo XVIII. Alemania e Italia formaron parte de la segunda oleada, desafiando, en alianza con Japón, al segundo Imperio británico y a Estados Unidos. La Unión Soviética se enfrentó luego a un Occidente más amplio, como principal contendiente durante la segunda mitad del siglo XX. Vista bajo esta luz, la integración europea de postguerra se llevó a cabo sobre episodios anteriores de Estados aspirantes rivales y constituyó el umbral de una nueva ronda de un proceso más amplio. En definitiva, la mayoría de los Estados rivales se han incorporado al núcleo lockeano en expansión sin superar del todo las anteriores fracturas. Las fisuras que como consecuencia recorren el Occidente expandido son un factor constitutivo de la integración europea.

Podemos dejar para otro momento la evolución posterior de ese proceso, en el que China sería hoy el principal rival (junto con muchos otros «contendientes secundarios» como Brasil, México, Turquía, Irán e India, dispuestos a incorporarse al terreno de juego); baste aquí este esbozo para repensar la geopolítica y la economía política global desde un ángulo ra-

⁴ Varios de los ideólogos del partido parlamentario durante la guerra civil inglesa habían regresado del exilio en Norteamérica. El propio Cromwell, en cuestiones de teología y organización eclesial, «miraba hacia Nueva Inglaterra más que a Escocia»: Angus CALDER, *Revolutionary Empire. The Rise of the English Speaking Empires from the Fifteenth Century to the 1780s*, Londres, 1981, pp. 217, 212. En cuanto a los efectos de la Revolución Gloriosa en Norteamérica, véanse las pp. 384-385 y 388.

dicalmente diferente al modelo hobbesiano de Estados que luchan por el poder en un mundo anárquico. No hay tras él ningún mecanismo metafísico transhistórico; los Estados aspirantes rivales son simplemente aquellos cuyas clases dominantes tienen más éxito en «negociar las presiones modernizadoras» (surgidas no sólo de Gran Bretaña, sino del núcleo lockeano), atribuyendo a sus Estados soberanos la tarea de movilizar a sus sociedades y de ofrecer así una ruta más corta y normalmente más brutal a la modernización y la integración social. El sujeto no es pues ninguna sociedad «civil», sino que, por el contrario, la pauta queda configurada por un Estado que confisca, en diversos grados, su sustrato social; por una clara demarcación del territorio soberano; y por alguna doctrina «revolucionaria», normalmente de tipo nacionalista, que moviliza a la población en el esfuerzo por ponerse a la altura; éstos son los rasgos característicos del Estado aspirante rival.

Nomadismo del capital

El «capitalismo», desde esta perspectiva, está subordinado a la constitución liberal, lockeana, del núcleo. No fue una característica de la constelación transatlántica original, y de hecho no podía serlo en aquella fase del desarrollo social. El capital es, ciertamente, un corolario histórico de la estructura núcleo / rivales, pero tiende a sobrepasar los confines de los espacios acotados imponiéndose a la sociedad global como una *disciplina extraterritorial*⁵. Históricamente, los elementos del capital cristalizaron en los intersticios existentes entre las estructuras productivas feudales –señoríos y gremios–, como circuitos financieros y de comercio a larga distancia fuera de la jurisdicción de las entidades soberanas de la sociedad europea –cortes principescas y eclesiásticas, ligas urbanas y provinciales–, que no se combinaron en un proceso conjunto, integrando la producción en los circuitos transnacionales del dinero y las mercancías, hasta la revolución industrial, que por supuesto tuvo su centro en Inglaterra; pero como «capital total» que opera a escala del mercado mundial, el capital sigue siendo una fuerza que tiende preferiblemente a ocupar las interconexiones entre jurisdicciones políticas distintas, ya que mediante el control de los intercambios comerciales y el crédito puede ejercer presiones competitivas sobre los salarios y las condiciones de vida y de trabajo en las diferentes sociedades a las que tiene acceso, sobredeterminando las estrategias de beneficio de los empresarios individuales o los «capitales particulares», por emplear la terminología de Marx. En este sentido, el capital tiende, como ha argumentado Ronen Palan, hacia una pauta «nómada» de organización, que opera en un «espacio liso» imaginario que los Estados *no pueden internalizar*⁶.

⁵ Marx dice que el capital «no es, como creen los economistas, la forma *absoluta* del desarrollo de las fuerzas productivas [...] es una disciplina sobre ellas, que se vuelve superflua y gravosa a cierto nivel de su desarrollo», *Grundrisse*, Harmondsworth, 1973, p. 415.

⁶ Ronen PALAN, *The Offshore World. Sovereign Markets, Virtual Places, and Nomad Millionaires*, Ithaca, 2003, p. 15 y cap. 7.

La especificidad de las relaciones entre el núcleo lockeano y el capital reside en la combinación de unos Estados que mantienen una autonomía formal con un espacio más amplio organizado bajo la soberanía de la propiedad y el contrato y, por lo tanto, del capital. Ese espacio transnacional, aunque sea externo a cada uno de los Estados, forma parte del núcleo como configuración más amplia. Las estructuras cuasi estatales como las instituciones de Bretton Woods, activas en ese espacio transnacional, deberían considerarse como infraestructuras técnicas y estadísticas a las que acceden preferentemente los Estados más fuertes del centro, más que como poseedoras (como las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales universales en general) de cualquier carácter parlamentario. Idealmente, son impermeables a la democracia y al compromiso de clases.

Integración europea

Podemos regresar ahora a la integración europea e interpretarla en ese marco. El proceso se inició con la Guerra Fría, en la que la URSS apareció como nuevo aspirante; pero la liberalización atlántica, siguiendo líneas lockeanas, y la reconciliación franco-alemana requerían soluciones diferentes, a menudo incompatibles. La Europa occidental continental tenía una larga historia de iniciativas y dirección por parte de Estados aspirantes; una liberalización precipitada podría haber desestabilizado la autoridad de la clase dominante sobre la sociedad. Dada la pérdida de poder de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tuvo que asumir un papel dirigente tratando de combinar elementos de intervención estatal con la necesidad de integrar el continente en un Occidente más amplio. A ese respecto, como en relación con Oriente Próximo y Asia oriental, había intensas rivalidades que enfrentaban a Washington y Londres, pero en lo que se refiere al Plan Marshall, que pretendía abrir la cerrada reconstrucción económica en el continente, apartando a los comunistas del gobierno y consolidando un bloque liberal en torno a los Estados anglófonos, Gran Bretaña estuvo absolutamente de acuerdo con Estados Unidos.

El impulso positivo del Plan Marshall para iniciar la transformación hacia el fordismo se apartó, sin embargo, del liberalismo tradicional, y éste fue un cambio *cualitativo*, lo que refuta las afirmaciones de que el plan sólo suponía una modesta contribución a un esfuerzo básicamente europeo⁷. Paul Hoffman, su administrador general, lo calificó adecuadamente como una contienda «entre la línea de montaje estadounidense y la línea del partido comunista»⁸. La preocupación de Hoffman era compartida por Jean Monnet,

⁷ Ésta es la tesis de Alan MILWARD en *The Reconstruction of Western Europe 1945-1951*, Londres, 1984.

⁸ Citado en Anthony CAREW, *Labour under the Marshall Plan: The Politics of Productivity and the Marketing of Management Science*, Manchester, 1987, p. 8. Véase el cap. 6 de mi

banquero francés y gestor de la logística aliada durante la guerra, que estaba convencido de que sólo una profunda transformación de la sociedad europea siguiendo la línea del New Deal estadounidense podría ofrecer una alternativa al socialismo. En 1949-1950 Monnet y sus asociados en el Estado francés y en las estructuras de planificación estatales desarrollaron una estrategia para vincular el resurgimiento industrial de Alemania occidental con un marco «europeo» dotado de poderes reguladores reales. Una economía organizada en torno al eje franco-alemán podría entonces consolidar las ventajas temporales que la modernización planificada estaba produciendo en Francia, o al menos permitir una redistribución pacífica y negociada, como había sucedido en el núcleo anglófono sobre la base del liberalismo y del Estado de derecho. La República Federal Alemana, a su vez, deseaba dar respuesta a las iniciativas francesas con respecto a Europa como forma de obtener mayor soberanía y fuerza económica.

La Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), la primera institución propiamente «europea», creó una estructura de trabajo socializado fuera del alcance del control estatal nacional y del examen parlamentario, que, por otra parte, se situaba en gran medida dentro de la tradición del Estado aspirante con una economía políticamente dirigida, la cual incluía la representación de los empresarios y de los sindicatos siguiendo una línea corporativa. Las industrias del carbón y del acero de los seis países de la CECA quedarían subordinadas a los sectores que utilizaban el acero, aunque la producción automovilística del fordismo europeo estuviera todavía en su infancia. Tras el estallido de la Guerra de Corea, la producción militar tuvo que compensar la estrechez de los mercados civiles internos. Aun así, la coordinación de planes de inversión y (cierto) control de precios en la industria siderúrgica contribuyó a crear un nivel de planificación en el que el interés transnacional de clase podía prevalecer sobre las limitaciones democráticas impuestas a los diversos gobiernos⁹. Por otra parte, la Alta Autoridad, una institución de tipo federal en la tradición del Estado aspirante, fue finalmente eclipsada por el Tribunal Europeo de Justicia, que apuntaba en la dirección de un espacio legal transnacional en el sentido lockeano, en el que la disciplina del capital podría ser puesta en vigor por decisiones del Tribunal promovidas por demandantes que sufrieran imperfecciones del mercado o infracciones de la legislación anti-monopolios, más que por una institución política¹⁰. Pero ésta no era una

libro *The Making of an Atlantic Ruling Class*, Londres, 1984 (o la página web www.theglobal-site.ac.uk) en cuanto a las biografías de Hoffman y Monnet.

⁹ Ernst B. HAAS, *The Uniting of Europe. Political, Social and Economic Forces, 1950-1957*, Stanford, ²1968, p. 194. A medida que la minería del carbón perdía rápidamente terreno frente al petróleo, la CECA sirvió básicamente para facilitar su desaparición de forma más o menos equitativa; también hizo más fácil a los gobiernos «vender» el cierre de minas invocando una autoridad más alta. Cfr. Alan MILWARD, *The European Rescue of the Nation State*, Londres, ²2000, p. 63.

¹⁰ Albert STATZ, «Zur Geschichte der westeuropäischen Integration bis zur Gründung der EWG», en Frank Deppe (ed.), *Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Zur politischen Ökonomie der westeuropäischen Integration*, Reinbek, 1975, p. 144.

conclusión prevista, y el rasgo constitutivo real del subsiguiente proceso de integración es la existencia de *dos líneas paralelas de desarrollo*.

Lógicas de unificación alternativas

La emancipación de Alemania occidental de su condición de país ocupado recorre todo el proceso de integración. La propuesta, reescritura y colapso final de la Comunidad Europea de Defensa (CED) entre 1950 y 1954 se suele presentar en los informes sobre la integración europea como un fracaso, pero sólo fue una derrota de lo que de otro modo (mediante la comunidad política paralela) se habría convertido en un sólido reducto federalista en la tradición del Estado aspirante. En cambio, la cuestión del rearme alemán, que Francia había tratado de contener mediante la CED, se convirtió en un importante jalón en la restauración de la soberanía de la República Federal, que a su vez iba a ser un componente decisivo del proceso de integración posterior si se quería evitar la creación de un auténtico cuasi Estado supranacional que podría acabar controlando sus fundamentos socioeconómicos, lo que comprometería y politizaría la expansión transnacional del capital. En aquel momento Francia se iba retirando de sus posiciones imperiales, desde la dramática derrota a manos de los vietnamitas en Dien Bien Phu en 1954 al desastre de Suez, que sólo exacerbó su fracaso en aplastar el levantamiento nacionalista en Argelia. «Europa» se convirtió más que nunca en el chaleco salvavidas para el papel de Francia en el mundo; pero la estrategia de tratar de insertar el resurgimiento de Alemania occidental en el contexto europeo, permitiendo a Francia capitalizar su fuerza real y controlar la inevitable redistribución, se tambaleaba frente al interés alemán (y holandés) por un mercado común. De nuevo, ambas estrategias se pueden entender, respectivamente, en términos de la creación de una estructura supranacional europea en la tradición del Estado rival y la configuración de un espacio civil-legal europeo en el que el capital transnacional pudiera liberalizarse siguiendo líneas «lockeanas», con el Estado subordinado al capital.

Paradójicamente, hasta que Francia completó su doloroso ajuste al Mercado Común en ese segundo sentido (y reorganizó sus posiciones coloniales en un marco neocolonial) no se estableció en «Europa» un curso liberal, algo que se fue haciendo gradualmente. La mayoría de los partidos liberales todavía pensaban que el Mercado Común también era una institución federal o federalizante, y votaron contra la ratificación en sus parlamentos nacionales; pero en la constelación transnacional proyectada el Estado nacional mantiene sus prerrogativas dentro de la estructura más amplia, aunque esté sometido a reglas comunes. El papel de la toma del poder por De Gaulle en 1958 debe entenderse en términos de la imposibilidad de llevar a cabo esa transformación en Francia por medios democráticos; el Partido Comunista Francés, aunque en continuo declive desde la guerra, todavía contaba con la fracción parlamentaria más numerosa. Sin embargo, De Gaulle compartía con los comunistas el compromiso con

la soberanía francesa; a su juicio, el supranacionalismo federal había obligado a Europa a seguir una línea de guerra fría subordinada a los intereses globales estadounidenses. En ese proceso, los gobiernos de la IV República habían renunciado a intereses vitales para Francia, permitiendo que Alemania occidental se recuperase en el contexto atlántico bajo la cobertura de la unidad europea¹¹. Tan pronto como entró en el palacio presidencial, De Gaulle abrió el debate sobre la naturaleza del proceso de integración europeo; no para atacarlo, como se ha dicho a menudo, sino más bien para reconfigurarlo hacia una estructura liberal intergubernamental en el espíritu del transnacionalismo lockeano, pero *europeo*.

La desviación gradual de los patrones de integración más acordes con las tradiciones de un Estado dirigente había engendrado entretanto un interés «europeo» orientado sin duda hacia la liberalización y que compartía en muchos aspectos la perspectiva atlántica más amplia en términos de un compromiso para promover la modernización capitalista a escala mundial. Pero el hecho de que durante todo el proceso los avances en esa dirección se realizaran creando estructuras similares a las de la experiencia del Estado rival –la Alta Autoridad de la CECA es un ejemplo, pero también lo son la política agrícola común y la política de asociación hacia las antiguas colonias, ambas a raíz de iniciativas francesas renovadas por De Gaulle– muestra que tal estrategia de integración no es algo que se pueda aplicar tácticamente y revocar más tarde. Opera como una estructura socializante, también en el sentido de establecer un contexto normativo que promueve una perspectiva particular entre las fuerzas sociales que embrida.

Desafíos durante la década de 1970

Esto se vio reforzado por las soluciones «europeas» a situaciones de crisis como la de mayo de 1968 y el subsiguiente ascenso de la izquierda. En el sur de Europa, la aparente radicalización de la socialdemocracia y la adopción del eurocomunismo por los partidos comunistas de más peso planteaban un reto difícil. El eurocomunismo, más pronunciado en Italia y Francia y en la clandestinidad en la España de Franco, desplazó a la izquierda autoritaria hacia el centro del terreno político, alejándola de la experiencia soviética, lo cual le arrancó el estigma de pertenecer a una cultura política diferente e hizo más difícil negar la legitimidad de esos partidos como competidores por el poder en un contexto liberal. Para la clase capitalista en el continente, la respuesta a corto plazo frente al ascenso de la izquierda fue una transnacionalización de la producción y la fuga de capitales; el corolario lógico habría sido una nueva liberalización, nacional y europea. Los políticos, no obstante, estaban más preocu-

¹¹ Charles DE GAULLE, *Mémoires d'espoir*, vol. 1, *Le Renouveau 1958-1962*, París, 1970, pp. 178–179, 182.

pados por la creación de estructuras parlamentarias europeas que atenuaran las diferencias entre la socialdemocracia alemana, holandesa y británica, y los socialistas del sur de Europa, en particular los franceses, que parecían dispuestos a establecer pactos electorales con los comunistas. Así pues, el federalista *Informe Tindemans* de 1976 enunciaba entre sus muchas recomendaciones un Parlamento europeo directamente elegido. Ciertamente es que esa institución todavía carecía de poderes efectivos y no se enfrentaba a ninguna autoridad soberana obvia, dado el fortalecimiento paralelo del Consejo Europeo de jefes de Estado y de gobierno (responsables frente a sus Parlamentos nacionales) y la reducción de la Comisión Europea a un cuasi-secretariado. Pero generó la formación de partidos europeos al mismo tiempo que aseguraba la mayoría para los democristianos y socialdemócratas en el Parlamento de Estrasburgo, con los comunistas prudentemente relegados de nuevo a un *status* de minoría.

Gran parte de las propuestas de Tindemans –como sus planes para una defensa y una política exterior europea común– quedaron en letra muerta, pero la intervención federalista que representaban en esa etapa planteó de nuevo obstáculos que impidieron a la Europa integrada converger con el núcleo anglófono como «extraterritorialidad interna», un espacio más amplio del que quedarían estructuralmente excluidos la democracia y el compromiso de clases. La Unión Europea actual se ha desarrollado, sin duda, hacia una estructura liberal semejante a la del núcleo lockeano en aspectos claves, en particular mediante el papel más relevante del Tribunal Europeo de Justicia; pero el hecho de que haya recurrido a formas heredadas de la experiencia del Estado aspirante rival ha reproducido un conjunto de actitudes e intereses propiamente «europeos», tanto en la esfera geopolítica como en sus relaciones con el bloque soviético y el Tercer Mundo y con las formaciones que les han sucedido. Los intentos estadounidenses de imponer una disciplina «occidental» sólo han servido para estimular la búsqueda de la independencia europea en sectores estratégicos como la industria aeroespacial¹².

La ambivalencia entre el liberalismo lockeano y la tradición de los Estados aspirantes rivales ha quedado bien ilustrada por la política británica hacia Europa. El Reino Unido, «miembro» fundador del núcleo lockeano original, pero geográfica y económicamente –cada vez más– «europeo», primero permaneció fuera y luego negoció ventajas estructurales competitivas con la UE. La necesidad de preservar el *status* privilegiado de la City de Londres y de mantener las prerrogativas del Parlamento de Westminster se condicionaron mutuamente; la base de masas doméstica en favor del mantenimiento del liberalismo transnacional ha sido mantenida continua-

¹² Cuando Estados Unidos impidió la venta de aviones de pasajeros Airbus a Libia en 1982 aplicando su legislación sobre la exportación de componentes estadounidenses, esto puso en marcha el proceso hacia una «europeización» total de la industria aeroespacial de la UE que hoy día está prácticamente acabada; véase Gert MEIJER, *Internationalisatie van de Europese vliegtuigindustrie*, Amsterdam, 1984, p. 88.

mente con vida por miedos populistas sobre un supuesto «superEstado» europeo. Pero a medida que el proceso de integración europea va abandonando progresivamente el ímpetu federal en favor de una liberalización generalizada (tras haber perdido la motivación referente a la seguridad derivada de la Guerra Fría, así como la necesidad de un complejo toma y daca con respecto a la soberanía alemana), la preeminencia de la cuestión «europea» en la política británica va disminuyendo.

Tal aterrizaje suave es imposible en el continente, pero los canales establecidos de control electoral han resultado inadecuados para la tarea de difundir ese mensaje. La integración europea aleja de los Parlamentos áreas claves de la planificación política. El Parlamento europeo no ha compensado esa erosión de la democracia, pero aun así representa, junto con ciertas estructuras corporativas europeas, una invasión del espacio liberal transnacional atendiendo a las normas del núcleo original. Este traspaso peculiar, y por supuesto parcial, de las prerrogativas parlamentarias en favor de «Europa» forma parte de una tendencia más amplia a la restricción de la democracia electoral.

Revolución democrática

La estructura núcleo / aspirantes que subyace a la política mundial contemporánea y la economía política global es un aspecto de la amplia revolución democrática que ha constituido la fuerza impulsora de la política moderna. Esa revolución democrática, propagada desde el noroeste europeo, se fue configurando en luchas emancipatorias contra la supremacía feudal-aristocrática, el absolutismo monárquico y el dominio de la Iglesia católica romana sobre la vida espiritual y cultural. En lugar de aislar un solo elemento y hablar de «revolución burguesa», sería mejor ver las primeras fases de la revolución democrática, la Reforma y la Ilustración, en términos de una reordenación de la forma Estado y de su relación con la sociedad que fue ante todo democrática, y sólo en segundo lugar servía a los intereses de los terratenientes orientados hacia el mercado, los comerciantes y los artesanos de las ciudades. La burguesía se constituyó entonces como clase en el proceso de consolidación constitucional de la nueva realidad, un proceso que también la separó de las bases más bajas. De hecho, en las revoluciones inglesa y francesa la burguesía no se comportó nunca como clase coherente, sino como una amalgama de diversas fuerzas sociales laxamente unidas por su residencia urbana y su actividad comercial, congregada en torno a doctrinas individualizadoras como el protestantismo y las filosofías sobre los derechos humanos. Sólo en las restauraciones que siguieron a esos acontecimientos decisivos cristalizó realmente un interés burgués de clase¹³. A mediados del siglo XIX vemos a la burguesía que describe Balzac

¹³ Véase Eugen ROSENSTOCK HUESSY, *Out of Revolution. Autobiography of Western Man*, Providence (RI), 1993.

en sus novelas como un tipo humano reconocible socialmente; de no ser así no se podría haber escrito un *Manifiesto Comunista*.

Fue la conquista temporalmente desigual del poder del Estado en la revolución democrática y los distintos grados en que la burguesía en ascenso pudo poner su sello sobre ella, lo que configuró la distribución del espacio geopolítico como un núcleo que iba haciendo frente a una sucesión de Estados aspirantes. Durante las guerras de religión en el continente y en las Islas Británicas aparecieron por primera vez diferentes pautas de organización Estado moderno / sociedad y se hizo obvia asimismo la implicación extranjera. En este sentido se puede afirmar que la fase burguesa de la revolución democrática creó la estructura núcleo / rivales por la que ha estado determinada desde entonces cada revolución democrática desde la Revolución Gloriosa de 1688. Como consecuencia, se han seguido produciendo revoluciones contra la confiscación por Estados aspirantes de la esfera social típica del núcleo lockeano; y aunque esto quizá trastorna la sucesión esquemática de revoluciones burguesas y proletarias, no resulta tan problemático si se examina a la luz de las presiones generales en favor de la emancipación a ambos lados de la linde núcleo / Estado aspirante.

No contamos con espacio aquí para un análisis en profundidad de la subsecuente trayectoria de la revolución democrática. Todo lo que cabe decir es que a lo largo de su recorrido, incluidas las fases de Reforma e Ilustración, se configuró como *un proyecto de emancipación e igualdad social universal*. Esto fue lo que en cada revolución llevó a las calles a la masa de la población, lo que a su vez permitió a los radicales (Thomas Müntzer, los niveladores, los hebertistas, etc.) intentar e impulsar la insurrección en nombre de la igualdad. De hecho, el propio movimiento obrero socialista se desarrolló como ala izquierda de la revolución democrática una vez que la industrialización comenzó a difundirse por toda Europa. Los partidos obreros primero se escindieron de los liberales como tendencia política específica, y luego abrazaron la democracia parlamentaria, el sistema burgués que se había erigido entretanto para permitir que las diferencias de interés se articularan en el seno de la sociedad. Por supuesto, esto también sirvió para disciplinar a los políticos socialistas; pero las corrientes socialistas que reconocieron a las clases medias progresistas-liberales como parte del mismo movimiento histórico, y por consiguiente como un aliado potencial, pudieron dar importantes pasos adelante; y allí donde la izquierda señaló a los elementos moderados próximos a ella como principal enemigo (como hizo Lassalle en Prusia-Alemania, o los comunistas cuando caracterizaron a la socialdemocracia como aliado del fascismo a principios de la década de 1930, antes del Séptimo Congreso de la Comintern), firmaron su propia sentencia de muerte¹⁴. En definitiva, un Parlamento con

¹⁴ Lucien GOLDMANN, «Die Marxistische Erkenntnistheorie und ihre Anwendung auf die Geschichte des Marxistischen Denkens», en Kurt Lenk (ed.), *Ideologie: Ideologiekritik und Wissenschaftssoziologie*, Neuwied y Berlin, 1971.

poderes reales también puede legislar en favor de la emancipación y la igualdad social.

Crisis de gobernabilidad

Fue esto precisamente lo que provocó la «crisis de gobernabilidad» que se produjo a mediados de la década de 1970. La explosión de mayo de 1968, así como la marea antiimperialista en el Tercer Mundo encabezada por la lucha de liberación nacional en Vietnam y la estrategia parlamentaria de Salvador Allende de racionalización y democratización radical, testifican todas ellas una poderosa corriente de aspiraciones democráticas, en la que las demandas de emancipación política y cultural y de igualdad material eran parecidamente notorias. La normalización de las relaciones Este-Oeste (que paradójicamente tuvo lugar tras las limitaciones soviéticas al intento de revitalizar el comunismo checoslovaco) sirvió al mismo tiempo para evitar que la violencia local pudiera prender una importante confrontación Este-Oeste. La nueva oleada democrática acercó el objetivo de la emancipación general y la igualdad social, lo que no quiere decir que no hubiera serias contradicciones en ese movimiento. Está claro, por ejemplo, que el impulso por un nuevo orden económico internacional, que pretendía construir una coalición reformista sobre las oleadas de las luchas de liberación del Tercer Mundo y la distensión, tuvo efectos que a menudo operaron *contra* la democracia dentro de los Estados que lo apoyaban, y no sólo porque también era un esfuerzo retador colectivo por parte de Estados que trataban de confiscar a sus sociedades siguiendo el patrón «bonapartista». Pero había un elemento común a los tres ejes (relación de clases en Occidente, emancipación del Tercer Mundo, distensión) que contrasta fuertemente con la fase subsiguiente: los tres suponían un desafío expreso a la disciplina del capital sobre la sociedad, tanto nacional como internacionalmente. Como escribieron dos autores soviéticos en 1982:

el movimiento de protesta social de la década de 1960 contribuyó a [...] la tesis ideológica según la cual una democracia real y coherente en la vida político-social sólo es posible como limitación o incluso negación del capitalismo. Como réplica, varios [neoliberales] formularon a mediados de la década de 1970 la tesis opuesta: que un capitalismo «auténtico», esto es, «racionalmente organizado», sólo es posible como restricción de la democracia¹⁵.

El impulso hacia un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI), apoyado a medias por los Estados del bloque soviético, pero que aprovechaba objetivamente el equilibrio de fuerzas existentes en la arena mundial creado

¹⁵ Y. A. ZAMOSHKIN y A. Y. MELVIL, «Between Neo Liberalism and Neo Conservatism», en Edward D'Angelo *et al.* (eds.), *Contemporary East European Marxism*, vol. II, Ámsterdam, 1982, p. 225; he adaptado la terminología a la noción europea contemporánea del término «neoliberal».

por la distensión, incluía propuestas de establecer un régimen de control sobre las corporaciones transnacionales bajo los auspicios de la ONU: la democracia como «limitación o incluso negación del capitalismo». Por eso fue por lo que los socialdemócratas y eurocomunistas dieron la bienvenida al movimiento NOEI y valoraron positivamente la distensión, que figuras como Willy Brandt y Jan Tinbergen interpretaron en términos de una convergencia a largo plazo de las pautas de desarrollo socioeconómico. La *respuesta* al movimiento en favor de la democracia social y económica produjo entonces la «tesis opuesta», en concreto que el capitalismo «racionalmente organizado» sólo es posible como restricción de la democracia. Fue esa democracia restringida la que permitió inicialmente el giro neoliberal del proceso de integración europea, que está dando ahora los resultados que vemos en Francia y menos espectacularmente –por el momento– en los demás países de Europa continental. La patética adhesión a la UE de las elites del antiguo bloque soviético constituye un capítulo específico de este drama que debemos dejar de lado aquí, aunque el sesgo autoritario de la política en países como Polonia puede sugerir algunas de las interrelaciones entre política económica neoliberal y un estado de ánimo desesperado en la sociedad.

¿Una cultura antagonista?

Los perfiles de una respuesta estructural a mayo de 1968 fueron esbozados primero por Daniel Bell, intelectual cazarrojos de la era McCarthy y autor de la tesis del «fin de las ideologías» del término de la década de 1950. Su artículo de 1969 «The Cultural Contradictions of Capitalism» (más tarde ampliado a un libro con el mismo título) sigue siendo un texto obligatorio para cualquiera que quiera entender los fundamentos políticos de la restricción de la democracia ejecutada más tarde. Bell argumentaba que el Estado del bienestar produce fuerzas que, en caso de permanecer incontroladas, socavarían el orden capitalista desconectando a los individuos de las limitaciones materiales y psicológicas de su posición económica. Del mismo modo que la economía de producción / consumo de masas fordista incrementa los «ingresos discrecionales» (la parte de la renta empleada para desarrollar un estilo de consumo opcional más allá de las necesidades imperiosas de la supervivencia), según afirmaba Bell, «la expansión de la educación superior y la ampliación de una atmósfera social permisiva ha extendido el ámbito del *comportamiento social discrecional*». Sobre esta base, jóvenes de origen relativamente modesto se sienten libres de las restricciones de clase y comienzan a pensar que también para ellos la vida podría ser un terreno de participación y posibilidades ilimitadas. «Al disolverse la estructura de clases tradicional, cada vez más individuos pretenden identificarse, no por su ocupación (en el sentido marxista), sino por sus gustos culturales y su estilo de vida¹⁶.»

¹⁶ Daniel BELL, «The Cultural Contradictions of Capitalism», en Daniel Bell e Irving Kristol (eds.), *Capitalism Today*, Nueva York, 1971, pp. 31-32.

En opinión de Bell, esto se convirtió en un problema político porque los jóvenes se veían atraídos por una «cultura antagonista», la lucha del espíritu creativo libre frente a las convenciones de la sociedad inherentes a la modernidad. Todo el mundo se creía con derecho a unirse a la vanguardia del progreso y a exigir un cambio radical a partir de la suposición de que la sociedad había llegado a una era «más allá de la necesidad», «al final de la historia, al reino de la libertad perfecta». Lo que había que afrontar, por consiguiente, era el contexto en el que se había configurado esa «cultura antagonista» con base de masas. La solución que surgía del análisis de Bell consistía en restaurar la racionalidad microeconómica en el ciclo vital de cada individuo, eliminando la dimensión social de la gestión keynesiana de la demanda, la oferta de servicios sociales y la redistribución. La eliminación de los *free raiders* dejaría sólo a aquellos que pudieran pagarse el privilegio de experimentar y jugar con los cambios radicales; los demás serían mantenidos a raya por los límites de su capacidad de gasto. Por decirlo a lo bruto: «¿Queréis manifestaros bajo una bandera roja mientras estudiáis en la universidad? – Pues bien, estad seguros de que no disfrutaréis de una *buena* beca de estudios».

La voz solitaria de Bell no podía, por supuesto, servir de mucho frente a la oleada democrática de la década de 1970, de no haber habido otras fuentes a las que podía recurrir la respuesta de la clase dominante. Aquí deberíamos recordar la confusión en que se vieron sumidas las estructuras políticas de Occidente como consecuencia de las derrotas de finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, tanto nacionales como internacionales. La Administración Nixon era una expresión de la crisis y la exacerbó con sus respuestas desordenadas. Prosiguiendo el tipo de soluciones violentas que ya habían llevado a Estados Unidos al atolladero asiático durante la segunda mitad de la década de 1960, viró de repente hacia la distensión con los supuestos instigadores de la rebelión del Tercer Mundo y del ascenso de la izquierda, Moscú y Pekín, con la esperanza de enfrentarlos entre sí y liberarse del cenagal vietnamita, pero dando también pasos reales en el control de las armas nucleares estratégicas. Allende fue derrocado en 1973 con apoyo estadounidense, pero ni a Nixon ni a Kissinger les importó llegar a acuerdos con los gobiernos comunistas. Esta contradicción del imperialismo estadounidense fue una de las principales razones para la formación de la Comisión Trilateral y la reorientación de la política exterior occidental durante la presidencia de Jimmy Carter hacia una estrategia global de «derechos humanos» que deslegitimó de hecho al Estado fuerte fuera cual fuera su orientación política.

El informe de 1975 de la Comisión Trilateral sobre la «crisis de la democracia» fue un hito en la identificación de los problemas que afrontaba el orden dominante durante aquel periodo. Sus autores, Michel Crozier, Samuel Huntington y Joji Watanuki, partían del argumento de Daniel Bell de que la riqueza relativa había creado un «síndrome de valores» problemático. Al tiempo que expresaban su preocupación por los muchos «intelectuales ocupados en los valores», críticos hacia la autoridad existente

(«intelectuales antagonistas»), señalaban en una nota más esperanzada el crecimiento paralelo de una capa de «intelectuales tecnócratas y orientados hacia la política». Aun así, su conclusión era que «en los últimos años, las operaciones del proceso democrático parecen haber generado una ruptura de los medios tradicionales de control social, una deslegitimación de la política y otras formas de autoridad, y una sobrecarga de demandas a los gobiernos que excede su capacidad de respuesta»¹⁷.

Hacia una síntesis neoliberal

El informe subrayaba la diferencia a este respecto entre el Occidente anglófono, donde la industrialización y la democratización se desarrollaban a la par, y Alemania, Italia, Japón y otros países (Estados rivales), donde la democratización se había retrasado históricamente con respecto a la industrialización. Esto había creado desequilibrios específicos, exponiendo el orden político en esas sociedades a críticas hacia la «democracia burguesa» desde diversos ángulos. Con otras palabras, los peligros para el orden establecido eran más graves fuera del núcleo lockeano. Las soluciones, cabía deducir, tendrían que provenir de ese Occidente. En su contribución al informe, Huntington identificaba la equiparación de la democracia con la igualdad social como uno de los principales problemas del concepto prevaleciente de democracia¹⁸. Entre las recomendaciones del informe destacaba la idea de que las cuestiones de estructura social y distribución de la renta, y en consecuencia el sistema económico, debían quedar aparte de lo que se podía cambiar mediante el proceso electoral. Aunque las conclusiones del informe y su discusión en la Comisión Trilateral fueran a veces contradictorias, reflejando quizá la confusión del periodo, podemos ver ahora que se trataba de un proyecto a largo plazo.

El argumento de Bell era que una democratización continua abría la vía al socialismo; así, pues, había que desanudar de un modo u otro la proporcionalidad entre recursos económicos individuales y aspiraciones políticas. El informe sobre «crisis de la democracia» recomendaba reducir la «carga» de las demandas democráticas apartando la economía del abanico de cuestiones de las que deben ocuparse el gobierno o el Parlamento ante el que éste es responsable. La corriente de pensamiento que unió esas dos líneas de argumentación fue el neoliberalismo de Hayek y Friedman, quienes en 1947 constituyeron la Mont Pèlerin Society para combatir lo que Hayek identificaba como «la ruta hacia la servidumbre», que se abría inexorablemente si se dejaba al Estado desempeñar un papel en la economía, y para promover en su lugar dispositivos lockeanos. La red Mont Pèlerin sobre-

¹⁷ Michel CROZIER, Samuel HUNTINGTON y Joji WATANUKI, *The Crisis of Democracy. Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission*, Nueva York, 1975, pp. 8-9.

¹⁸ Huntington condenaba la *Theory of Justice* de John Rawls por propagar esa equiparación entre democracia e igualdad.

vivió hibernada durante casi tres décadas en los Departamentos de Economía de las universidades de elite de Occidente, como Chicago y la London School of Economics, marginada de la vida pública e incluso ridiculizada por la corriente principal keynesiana, pero emergió triunfante durante la crisis del keynesianismo y el fordismo a principios de la década de 1970.

La neutralización de la socialdemocracia (y la consiguiente restricción de la democracia política) es un componente vital del establecimiento de una «sociedad abierta» neoliberal. La tesis sobre el «fin de la historia» de Fukuyama, según la cual el capitalismo liberal y la democracia parlamentaria triunfaron conjuntamente sobre los «totalitarismos» de los Estados rivales, oscurece el hecho de que la democracia tuvo que plegar sus alas antes de que el capital pudiera reimponer la disciplina neoliberal¹⁹. El hecho de que esta última fuera aplicada por primera vez en Chile bajo Pinochet, entre torturas y una represión masiva, no fue sólo un prefacio embarazoso a su puesta en práctica por Reagan y Thatcher. El neoliberalismo presupone una demolición completa de la vieja sociedad. No es un regreso a un liberalismo anterior, sino una utopía radical que puede exigir la destrucción violenta de cualquier obstáculo que se interponga en su camino. La nueva constitución elaborada por la Junta chilena fue denominada «Constitución de la Libertad» en honor a uno de los libros de Hayek. La propia Margaret Thatcher tuvo que defenderse frente a las críticas de la eminencia gris del neoliberalismo señalando, en su correspondencia con él, que la democracia parlamentaria impone ciertos límites a lo que se puede poner en práctica²⁰.

La interpretación neoliberal de la democracia que discutimos aquí se refiere a la emancipación lockeana de la «sociedad civil» *frente al Estado*. La economía, por no hablar de la igualdad social, queda fuera de la agenda democrática. Desde la perspectiva neoliberal, el Estado, con sus instrumentos de redistribución, planificación y gestión de las crisis económicas, debe retroceder ante el individuo abstracto. La idea clave al respecto es la de elección. Tal como ha sido interpretada por pensadores como Gary Becker, y extendida a todos los aspectos de la vida social, la teoría de la elección racional identifica de buena gana la regulación estatal y las políticas redistributivas como causas de las disfunciones económicas. La necesidad, enfatizada por Bell, de restaurar la lógica microeconómica en la

¹⁹ Francis FUKUYAMA, *The End of History and the Last Man*, Harmondsworth, 1992; una evaluación más precisa de la naturaleza del triunfo democrático de Occidente se puede encontrar en William ROBINSON, *Promoting Polyarchy*, Cambridge, 1996, y en Christoph GÖRG y Joachim HIRSCH, «Is International Democracy Possible?», *Review of International Political Economy* V, 4 (1998), que insisten en la erosión paralela de la democracia.

²⁰ La historia completa de la saga de Mont Pèlerin ha sido escrita desde una perspectiva aprobadora por Richard COCKETT, *Thinking the Unthinkable. Think Tanks and the Economic Counter Revolution, 1931-1983*, Londres, 1995, y desde una perspectiva crítica por Bernard WALPEN, *Die offenen Feinde und ihre Gesellschaft. Eine hegemonietheoretische Studie zur Mont Pèlerin Society*, Hamburgo, 2004 (que cita la correspondencia entre Thatcher y Hayek).

existencia de cada individuo, puede enfocarse ahora de una forma que se acomode a las propias aspiraciones que despertó el movimiento de mayo de 1968: autonomía, creatividad, autorrealización. El «problema del *free raider*, el «comportamiento social discrecional» de gente que no ha pagado de hecho por las cosas de las que disfruta, se puede resolver sin más eliminando la estructura de solidaridad social sobre la que se basa el Estado del bienestar.

Dejar aparte la economía

El neoliberalismo, como teoría económica, entroniza al capital como fuerza soberana en la organización de la sociedad. Los únicos agentes que reconoce explícitamente son los individuos propietarios, «libres» para dedicarse a una búsqueda competitiva de mejoras, y el mercado, que es el regulador de esa búsqueda. El capital, como riqueza móvil que ya se ha acumulado y atrincherado políticamente en los puestos de mando de la economía globalizadora, queda oscurecido como fuerza social por la resurrección de un universo imaginario de individuos, algunos de los cuales poseen por casualidad Microsoft y otros sólo disponen de su fuerza de trabajo, o ni siquiera eso. El neoliberalismo naturaliza así las naciones capitalistas tomando la definición económica de hombre / mujer como punto de partida de una sociología integral, mientras que deja a la pura contingencia los «resultados». El problema estructural de la modernidad identificado por Bell, la «cultura antagonista», se resuelve mediante la individualización y una restauración de la racionalidad microeconómica, combinadas para disciplinar las elecciones del individuo y ajustarlas a su presupuesto real. De lo contrario, el ciudadano asume riesgos que pueden resultar imposibles de afrontar. El proceso de reestructuración («reforma») neoliberal convierte así al individuo «libre» en una fuerza que contribuye a la inestabilidad dinámica de un capitalismo en rápido desarrollo, porque, dado el «riesgo», la «elección» tiene consecuencias de largo alcance que pueden decidir sobre la totalidad de la vida de cada uno²¹.

Finalmente, la contrapartida del Estado castrado, cuya soberanía retrocede frente a la soberanía del capital, es una sociedad castrada. El nuevo concepto de «sociedad civil» que ha ocupado el lugar de los viejos usos del término se plantea primordialmente como lo *opuesto* al Estado coercitivo, añadiéndose así a la deslegitimación de la tradición del rival aspirante y en consecuencia de cualquier desarrollo no controlado por el capital transnacional. También implica un concepto distinto de democracia como juego competitivo dentro de ciertos límites. Del mismo modo que los competidores económicos no pueden desafiar la naturaleza de la

²¹ La anticipación continua de una posible elección equivocada, o la posibilidad de perder una oportunidad, escribe Alex Demirovic, tensa a los individuos y socava su capacidad de imaginar o emprender acciones colectivas capaces de cambiar sus condiciones de vida: véase Walpen, *op. cit.*, p. 243.

propia economía de mercado (y por eso el Estado tiene que estar separado de la economía y abstenerse de emprender cualquier actividad que los sujetos privados puedan llevar a cabo), los participantes en la competición democrática deben aceptar el «campo de juego» dado; esto es, el orden sociopolítico existente. La competencia política no puede incluir, por lo tanto, a aquellos que quieran cambiar ese orden. Como escribe Fukuyama, «en las democracias más avanzadas las grandes cuestiones que afectan al gobierno de la comunidad han quedado resueltas»; y lo mismo cabe decir de la «elección» de economía. De ahí que la desigualdad no pueda convertirse en una cuestión electoral.

Ésta es, pues, la consecuencia de separar la economía de la esfera de las elecciones políticas, o, para utilizar las palabras de Stephen Gill, de «constitucionalizarla» como premisa fundacional de la sociedad²². Las elites políticas «responsables» deben, por consiguiente, aceptar los principios de la organización social; las energías emocionales del electorado deben reservarse, idealmente, para cuestiones de identidad y moralidad. Evidentemente, en esas condiciones el interés por las elecciones sólo puede declinar. ¿Para qué votar si los principios por los que se guía la sociedad quedan fuera del alcance del votante? Ciertamente es que todavía se puede movilizar cierto fervor democrático en esa forma esterilizada de democracia, como en el caso en que el «poder popular» orquestado por los donantes occidentales se instrumentaliza para quitar de en medio a los gobernantes de un Estado rival. Pero una vez que los conciertos pop y los mítines de masas televisados por todo el mundo han contribuido a instalar la alternativa neoliberal, pronto se impone de nuevo la futilidad de elegir entre candidatos que besan a distintos niños pero comprometidos todos ellos con la privatización. De hecho, con respecto a esa democracia esterilizada o «poliarquía», resulta significativo que figuras como Brandt o Moro (por no mencionar a un socialista como Allende), que pretendían incluir en el proceso democrático a los decididos a cambiar la sociedad, tuvieran que desaparecer antes de poner en funcionamiento una «competición» política verdaderamente segura.

El proceso intrínsecamente revolucionario de emancipación general sobre el que se ha basado la democracia desde la Reforma y la Ilustración (marcado por crisis revolucionarias, y con la igualdad social como objetivo a largo plazo) queda así idealmente concluido. Nos elevamos a un universo ahistórico, donde la única aspiración que cabe mantener sensatamente es la de la mejora individual, situando a cada ciudadano o ciudadana en la posición en que debe preguntarse: ¿cómo conseguir esto?, ¿cuáles son mis posibilidades? La religión vuelve así al centro de la escena como premio de consolación, con la promesa de una vida ulterior decente allí

²² Stephen GILL, «European Governance and New Constitutionalism: Economic and Monetary Union and Alternatives to Disciplinary Neoliberalism in Europe», *New Political Economy* 3, 1 (1998).

donde el presente queda privado de perspectiva. Pero en las sociedades laicas de Occidente, especialmente, el cepo de la religión sobre los desposeídos es siempre precario, y las barriadas francesas son sólo un ejemplo de que una población mezclada de diversos orígenes inmigrantes no cae fácilmente bajo la influencia de una sola fe.

Confianza prematura

Hoy día parece como si los derechos de propiedad y la disciplina capitalista dominaran todo lo demás. Como dijo Blair en un discurso pronunciado en la Bolsa de Nueva York a finales de 1998, la cadena de crisis financieras que recorría el mundo en aquel momento no significaba que «la disciplina de mercado hubiera fracasado, sino que en una economía global la ausencia de tal disciplina puede tener un efecto devastador. Los países deben poner en pie el marco político adecuado»²³. El «buen gobierno» neoliberal se basa en ese sentido en la cristalización del capital soberano a escala global. La democracia queda reducida a votar sobre el personal al que se confía la gestión en unas u otras circunstancias.

Aun así, la idea de una homogeneización universal, sugerida por el término «globalización», resulta excesivamente prematura. La capacidad de diferentes sociedades de someterse a la disciplina capitalista varía, y la propia presión para que lo hagan tiende paradójicamente a reactivar la herencia específica de cada sociedad en nuevas combinaciones, en un proceso que Robert Boyer llama «hibridación»²⁴. Como consecuencia, las diferencias de naturaleza «civilizacional», las divisiones religiosas y etno-nacionales, se intensifican de forma que socavan la soberanía global del capital²⁵.

El rechazo de la Constitución Europea en Francia y los Países Bajos en mayo y junio de 2005 puede entenderse como un brote inesperado de interés por las elecciones, incluso por las casi inútiles «europeas», de electorados que reclaman el derecho a decidir hacia dónde se dirige la sociedad. Ciertamente, no se puede interpretar simplemente como expresión de aspiraciones a una auténtica igualdad y emancipación social. En los Países Bajos desempeñaron un papel sustancial en el «no» sentimientos populistas antiinmigrantes, y la cuestión de la eventual incorporación de Turquía a la UE era una de las principales preocupaciones. También hay una insatisfacción general con respecto a la ampliación de la UE a la Europa del Este, e incomodidad sobre el aflujo esperado de obreros inmigrantes que

²³ Citado en Paul LANGLEY, *World Financial Orders. An Historical International Political Economy*, Londres, 2002, p. 132.

²⁴ Robert BOYER, «De la première à la seconde *pax americana*», en Robert Boyer y Pierre François Souyri (eds.), *Mondialisation et régulations. Europe et Japon face à la singularité américaine*, París, 2001, p. 43.

²⁵ Amy CHUA, *World on Fire. How Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability*, Londres, 2003.

aceptan salarios y condiciones de trabajo por debajo de la media. En Francia también desempeñó un importante papel en la movilización de los votos negativos el «fontanero polaco», y cabe temer que los disturbios en las barriadas refuercen los reflejos xenófobos de grandes sectores de la población, al menos a corto plazo; pero también quedó clara tras el referéndum la continuidad entre el «no» de 2005 y los resultados de las primeras elecciones francesas en 1848: las regiones donde los candidatos de izquierda, Raspail y Ledru Rollin, ganaron en 1848, fueron 157 años después las mismas en las que la mayoría votó «no», mientras que las regiones que votaron «sí» fueron aquellas en las que ganó Cavaignac, el candidato de la derecha. Con otras palabras, la división que se ha observado en Francia tiene raíces históricas muy profundas²⁶.

La insatisfacción con respecto a los efectos de la introducción del euro como moneda común, especialmente el aumento de precios que supuso, e –implícitamente– las reglas deflacionarias bajo las que funciona el Banco Central Europeo, fueron un común denominador del «no». La ratificación francesa del Tratado de Maastricht que establecía la Unión Económica y Monetaria (UEM) fue ya difícil para la elite política, y en Dinamarca hubo que votar dos veces para obtener el «resultado correcto». La UEM, no obstante, con sus disposiciones para combatir la inflación y controlar el déficit, ha impuesto un ajuste estructural permanente a los países miembros, perjudicando los intereses de las economías organizadas en torno al capital y el empleo industrial. En cierto sentido, la UEM seguía la pauta histórica con la que Francia trataba de poner límites a Alemania antes de que se hiciera demasiado fuerte para ser controlada: al europeizar la política monetaria, los franceses pretendían obtener cierto control sobre los países con monedas fuertes, Alemania y los Países Bajos. Pero dado que el Banco Central Europeo es «independiente» –esto es, libre de cualquier control político parlamentario–, su mandato, el pacto de estabilidad, establece la línea neoliberal por toda «constitucionalidad».

La mesa redonda europea

El Tratado de Maastricht fue, pues, un paso importante hacia la organización de la UE de acuerdo con las líneas del núcleo lockeano. Un espacio libre para el capital, con jurisdicciones estatales separadas que mantendrían la soberanía política y la democracia fuera de la estructura más amplia, acerca apreciablemente el neoliberalismo europeo al neoliberalismo integral de corte anglosajón. El resultado se ha denominado «neoliberalismo compensatorio» o «neoliberalismo inmerso», para señalar que aún quedan elementos de protección social y del compromiso de clases, pero éstos están a cargo de los Estados miembros, que pueden intentar man-

²⁶ Véase en *Le Monde*, 1 de octubre de 2005, el análisis de un estudio de la Fondation Jean Jaurès (próxima al partido socialista francés).

tenerlos *una vez satisfechas* las condiciones deflacionarias de la Unión Monetaria Europea²⁷. Esas condiciones se deben a la ambición del capital europeo de aprovechar el colapso del bloque soviético y el socialismo para acelerar una transformación neoliberal –thatcheriana– en toda Europa, con la esperanza de que el «mercado» ayude a superar los consiguientes desequilibrios entre Estados y clases. Maastricht y la UME provienen en gran medida de iniciativas anteriores de la poderosa Mesa Redonda Europea de Industrialistas (MREI), que trataba de explotar el acceso privilegiado de la Unión Europea a Europa oriental.

La idea consistía en externalizar la producción hacia el Este y emplear la fuerza de trabajo allí «liberada» en formas que subvertían las estructuras de protección social todavía existentes en la mitad occidental del continente. En 1993, tras la desaparición de la URSS, la MREI propuso al presidente de la Comisión de la UE, Jacques Delors, la creación de un grupo dedicado específicamente a la «competitividad». Un consejo consultivo que incluía a la dirección de Unilever, ABB, Nokia y BP recomendó en tres informes (a) la modernización de la educación para mejorar la posición europea en la emergente economía global de la información; (b) la liberalización del sector público y (c) la flexibilización del trabajo, no sólo para el empleo en formas que favorecieran la competitividad de las empresas, sino con formación permanente y entrenamiento para adaptarse a necesidades cambiantes²⁸.

En la cumbre de Luxemburgo de finales de 1997 el trabajo del Grupo Asesor sobre Competitividad se convirtió en una estrategia de empleo que obligaba a los países de la UE a promover la «empleabilidad» de los trabajadores estableciendo programas de formación y entrenamiento, creando circunstancias más favorables para las pequeñas empresas recién formadas, flexibilizando el empleo y movilizándolo a más mujeres en el trabajo asalariado, eliminando restricciones para los turnos nocturnos y con otras medidas. Se acordó el principio de un informe anual de los gobiernos, de manera que se pudiera controlar el progreso en cada una de esas áreas y verificar el cumplimiento de los planes previstos. Entretanto, el Grupo Asesor reconstituido comenzó a trabajar en otros cuatro informes. El primero argumentaba que la protección social debía orientarse a la movilidad de la mano de obra; el segundo recomendaba la creación de mercados de capital más competitivos en Europa y el consiguiente crecimiento de un mercado europeo de pensiones. El tercero volvía a pedir mayor flexibilidad en el mercado laboral, y el informe final de 1999 combinaba las diver-

²⁷ J. Magnus RYNER, «Maastricht Convergence in the Social and Christian Democratic Heartland», *International Journal of Political Economy* XXVIII, 2 (1998); y Bastiaan VAN APELDOORN, *Transnational Capitalism and the Struggle over European Integration*, Londres, 2002, respectivamente.

²⁸ Henri HOUBEN, «Het nieuwe hoofddoel van de Europese Unie: de Lissabonstrategie», *Marxistische Studies*, 65 (2004), pp. 29–31. Todos los detalles de la estrategia de la MREI hasta la cumbre de Lisboa están tomados de esa fuente y de Van Apeldoorn, *op. cit.*

sas recomendaciones en un plan de acción que centraba los esfuerzos en esas áreas en ponerse a la altura de Estados Unidos, que había florecido como economía dinámica y abierta durante la década de 1990, contribuyendo a la actividad económica en el resto del mundo.

Al respecto debemos recordar que el capital nunca coincide exactamente con determinada entidad territorial; opera como un proceso de flujos que evita el enjaulamiento territorial, incluso a escala de la UE. Como ha documentado Bastiaan van Apeldoorn, las ventas fuera de Europa de las diecinueve principales empresas europeas pasaron del 34 por 100 de la facturación total en 1987 al 46,2 por 100 en 2000; por otra parte, las ventas fuera del país de origen pero *dentro* de la UE (que indicarían un perfil específicamente europeo) apenas aumentaron²⁹. Cabría deducir entonces que la UE funciona como una estructura facilitadora para la expansión global del capital, como sucede en el caso del Occidente original anglófono, abandonando expresamente la actitud de rival aspirante con sus implicaciones proteccionistas. Ser «europeo» implica más bien un acceso preferente al nivel de planificación en la UE que disfrutaban las grandes empresas europeas, y la capacidad para participar en importantes proyectos de desarrollo infraestructurales y «políticos» como los del sector aeroespacial (el Airbús o el sistema Galileo de posicionamiento y navegación por satélite).

Sin embargo, la economía de la UE no está inmersa en un sistema político correspondientemente adecuado, que permita construir coaliciones transnacionales en torno a estrategias económicas y neutralizar a la oposición mediante concesiones reales o simbólicas y pagos colaterales *por encima de* las fronteras nacionales. Aunque el Parlamento Europeo forma parte de la infraestructura política formal, la idea de que existe una réplica europea de la separación de poderes a escala nacional entre ejecutivo, legislativo y judicial es equivocada. Si en la UE existe una separación de poderes en ese sentido, observa Otto Holman, está formada por la Comisión –que trabaja en estrecha relación con las empresas europeas–, el Tribunal de Justicia y el Consejo de Ministros que representa a los Estados miembros (el Consejo Europeo en el caso de los jefes de gobierno). Esto reduce eficazmente el control parlamentario a lo que somete por su cuenta cada miembro del Consejo (uno de veinticinco), sin que el Parlamento pueda exigirles otra cosa³⁰.

La agenda de Lisboa

Inmediatamente después de la aventura de Kosovo, a la que Estados Unidos arrastró tras de sí a los Estados de la UE estableciendo las reglas

²⁹ Van Apeldoorn, *op. cit.*, pp. 140, 174.

³⁰ Otto HOLMAN, «Asymmetrical Regulation and Multidimensional Governance in the European Union», *Review of International Political Economy*, vol. II, n. 4 (2004), p. 719.

de la intervención en la nueva Europa oriental, el Consejo Europeo se reunió en Lisboa para discutir una estrategia global, inspirando las recomendaciones del Grupo Asesor sobre Competitividad durante los años anteriores. Pero el acuerdo de Lisboa en 2000 también dejó oír una nueva nota de rivalidad. Por un lado, trató de acelerar la introducción de la privatización y la flexibilización neoliberal; por otro, hubo un inconfundible elemento de desafío a Estados Unidos al establecer el objetivo de una economía más competitiva capaz de superar a la estadounidense en 2010.

El acuerdo de Lisboa prescribe que la tasa de participación laboral se eleve del actual 61 por 100 de la población potencialmente activa al 70 por 100 en 2010. En la cumbre europea de Barcelona en 2002 se decidió además elevar la fecha de jubilación en cinco años. Piénsese cómo afecta esto a la vida de la gente, sin que se realizara ninguna consulta. En su documento preparatorio para la cumbre de Lisboa, la Comisión Europea también recomendaba que cuando aumentaran las oportunidades de empleo se ocuparan rápidamente los puestos vacantes en condiciones de mercado favorables, de forma que quedara asegurado un crecimiento no inflacionista (esto es, sin aumentos de salario). Están pues a la orden del día horarios de trabajo flexibles, más oportunidades para el empleo a tiempo parcial y una revisión de la legislación que protege demasiado estrictamente el empleo e impone compensaciones excesivas por los despidos. El tercer pilar del proyecto de Lisboa es la compleción del mercado interno, que debe obtenerse eliminando los obstáculos remanentes a un mercado único mediante la liberalización de sectores como el gas, la electricidad, los servicios de correos y el transporte.

Para entonces, no obstante, se iba haciendo obvio que la agenda de Lisboa, basada en una década de preparación por la MREI, tenía que resultar aceptable para la población europea. Después de todo, era a ese nivel al que se estaban acordando cambios de gran alcance. La transformación no se realizaba, como en el caso del Chile de Pinochet, la Gran Bretaña de Thatcher o los Estados Unidos de Reagan, dentro de los confines de un Estado nacional. En Europa se ha buscado una política que legitime la estrategia económica desarrollada a escala de la de toda la UE; pero a pesar de los acomodos corporativos y federales llevados a cabo desde las experiencias de Estados aspirantes rivales en los mayores países del continente, las estructuras *políticas* reales –esto es, aquellas en las que los intereses económicos se transforman en interpretaciones diversas de un interés general– están poco desarrolladas. Existe un Parlamento Europeo y hay varios canales de articulación de intereses a escala de la UE, instituciones todas ellas que uno no encontrará a escala atlántica, ni en el ALCAN o la ASEAN. De aquí que la movilización política y la lucha o el compromiso de clases *puedan* desarrollarse a escala de toda la UE, por improbable que esto pueda parecer ahora. Pero comparada con la clara separación entre política nacional y economía transnacional vigente en el núcleo original, que reserva el espacio transnacional para el capital mientras que contiene las aspiraciones democráticas dentro de cada país, la «política europea»

parece tan contradictoria que podría ir en cualquier dirección, esto es, podría renacionalizar enteramente la política, dejando sólo una infraestructura reguladora a escala de la UE (con un Banco Central Europeo comparable en sus funciones a las instituciones de Bretton Woods), o presionar en favor del desarrollo de una política plena a escala de la UE. El «único» problema al respecto es que las poblaciones de Europa han sido doblemente privadas del derecho a decidir, tanto por la restricción general de la democracia debida a las reformas liberales, como por el desplazamiento específico de prerrogativas clave en el terreno económico de los Parlamentos nacionales a estructuras europeas.

Riesgos de la Constitución

Así pues, la decisión de convertir el programa neoliberal que culminó en la agenda de Lisboa en una «Constitución» europea, para obtener de este modo un mandato popular que asegurara la internalización de esa agenda por la ciudadanía, sólo podía acentuar la profunda división que se ha creado entre el interés capitalista dominante, que trabaja directamente con la Comisión a través de la MREI, y la gran mayoría de la población, que tiene que afrontar las consecuencias del desmantelamiento del compromiso de clases de postguerra y se ve excluida de hecho del proceso político europeo, en el que prevalecen los intereses empresariales. De aquí que la UE resultara más neoliberal de lo que los gobiernos nacionales podían permitirse. Pese al consenso general entre la clase política, de izquierdas o derechas, en que el paquete neoliberal es esencial e inevitable, los gobiernos tenían dificultades prácticas en hacer que las medidas acordadas fueran adoptadas a la velocidad requerida. La organización empresarial UNICE (Unión de Industrias de la Comunidad Europea) planteó, ya en 2002, que a su entender se requerían medidas concretas para evitar que la agenda de Lisboa quedara en letra muerta; pero en cada vez más países, en particular en Italia, Francia y Bélgica, surgieron en los primeros años del nuevo milenio poderosos movimientos de protesta contra la liberalización. El canciller Schroeder adoptó la inusitada decisión de dimitir del puesto de presidente del SPD alemán, que había arrebatado a Oskar Lafontaine, a fin de no perder más tiempo en tratar de convencer a su partido de la necesidad de los recortes, la liberalización y la privatización.

La Constitución Europea estaba destinada a convertirse en candado que anclara al neoliberalismo como componente inseparable de las estructuras políticas que operan a escala de toda la UE, obligando a cada Estado miembro a ejecutar el programa correspondiente en nombre de un voto democrático. Por supuesto, no todos los gobiernos se arriesgaron a preguntar a sus votantes qué pensaban del asunto, y los referendos francés y holandés demostraron por qué.

Evidentemente, el rechazo de la Constitución no ha dado carpetazo al programa neoliberal. De Villepin, que prometió «escuchar» al pueblo al tomar

posesión como primer ministro, ha proseguido las privatizaciones sin perder un segundo. Esto es lo que prendió los fuegos de las *banlieues*. De hecho, mientras el desarrollo social europeo permanezca hipotecado por el compromiso de la UE con un neoliberalismo mal ajustado, persistirán las anomalías generadas por el impulso «reformista», con su secuela de incomprendimientos y exageraciones, disputas y disfunciones. Las características de las economías continentales europeas, que recibían su cohesión y capacidad de inversión pública a largo plazo de un Estado dirigente, no son sólo reliquias del pasado, condenadas a ser barridas por el progreso. Las nuevas prácticas financieras se pueden difundir rápidamente, pero, como ha argumentado Robert Boyer, las prácticas de trabajo y empleo cambian muy lentamente, al depender de la habilidad y formación de los trabajadores, que se adquieren a una escala temporal muy diferente. Y aunque Europa (o Japón y Corea del Sur) puede estar mal equipada para incorporarse en términos favorables a la financiarización de la economía mundial, a largo plazo de la herencia de la empresa y el control estatal, del compromiso de clases y / o del paternalismo corporativo podría resultar un mejor entorno para el inevitable regreso al primer plano de nuevas formas de producción³¹. El problema básico con respecto a la estrategia de Lisboa es que asume un enfoque destructivo hacia las ventajas europeas existentes y sitúa toda su esperanza en el intento de competir con Estados Unidos adoptando al por mayor el modelo estadounidense.

Las grandes economías industriales de la Europa occidental continental han caído todas ellas, como consecuencia, en una crisis estructural que tiene hoy a Francia como centro de los acontecimientos.

³¹ R. Boyer en Robert Boyer y Pierre François Souyri, *op. cit.*, pp. 35, 42; véase también Emmanuel TODD, *Après l'empire: Essai sur la décomposition du système américain*, Paris, 2004, pp. 248, 250.